

25ª SESION ORDINARIA DEL 4 DE AGOSTO DE 1886

Presidencia del Dr. Serú

SUMARIO—Asuntos entrados—Se accede sobre tablas á la solicitud del señor Gnecca pidiendo el retiro de una anterior—Continúa la discusion pendiente sobre el dictámen de la comision de códigos en el proyecto de ley, en revision, relativo á la organizacion de los tribunales de la capital. (Delitos de imprenta).

<p>PRESENTE</p> <p>Presidente Albarracin Alcorta Arauz Araujo Barra Berdia Bermejo Bruchmann Bustillos Odceres Cabeza Calvo Calderon Carballido Cano Carbonell Castro Colombres Coquet Corvalán Crespo Dantas Espinosa Estrada Fernandez Figueroa (F. J.) Figueroa (M. A.) Gallo Garcia Gil Gomez Goyena Huidobro Lainez Laurencena Lubary</p>	<p>—En Buenos Aires, á 4 de agosto de 1886, reunidos en su sala de sesiones los señores diputados anotados al márgen, el señor presidente declara abierta la sesion, siendo las 2 y 30 p. m.</p>	<p>Malbrán Mansilla Morán Olmedo Padilla Portela Pino Posse Pujol Vedoya Roca Rodriguez Ruiz de los Llanos Solá Solari Soler Sosa Tagle Torrent Vidal Villamayor Villagra Yafre Yramain Zavalla Zeballos Zorrilla</p>	<p>corresponder todos ellos á ejercicios vencidos. Dios guarde á V. H. JULIO A. ROCA. C. Pellegrini.</p>
	<p>ACTA</p> <p>Se lee y aprueba la de la sesion anterior.</p>		<p>PROYECTO DE LEY</p> <p>El senado y cámara de diputados, etc., etc.</p>
	<p>ASUNTOS ENTRADOS</p> <p>Comunicaciones oficiales</p> <p>Ministerio de guerra y marina.</p> <p>Buenos Aires, julio 31 de 1886.</p> <p>Al honorable congreso de la nacion.</p>		<p>Art. 1º Abrese un crédito suplementario al departamento de Marina por la suma de trescientos ochenta mil seiscientos setenta y cuatro milésimos moneda nacional, para atender al pago de créditos que comprenden los años desde 1872 hasta 1885, y que corresponden á ejercicios vencidos.</p>
	<p>El poder ejecutivo tiene el honor de someter á la consideracion de V. H. el adjunto proyecto de ley, autorizándole á invertir la suma de trescientos ochenta y mil seiscientos setenta y cuatro milésimos moneda nacional, en el pago de los cuatrocientos cuarenta y ocho expedientes, provenientes en su mayor parte de diversos artículos provistos á la armada y reparticiones de marina, los que se remiten originales, correspondiendo á los años desde 1872 á 1885; no habiéndose decretado su abono por</p>	<p>AUSENTES</p> <p>CON LICENCIA</p> <p>Demaria Ocampo Terán Videla</p> <p>CON AVISO</p> <p>Acosta Augier Avellaneda</p>	<p>Art. 2º Comuníquese, etc. Pellegrini.</p> <p>(A la comision auxiliar de presupuesto.)</p> <p>Poder ejecutivo de la nacion.</p> <p>Buenos Aires, julio 28 de 1886.</p> <p>Al honorable congreso de la nacion.</p> <p>El reclutamiento del ejército de línea de la República debe hacerse, segun la ley vigente.</p>

Civilt por alistamientos voluntarios,
Gorostiaga por enganchados y destinados,
Leloir y en caso de insuficiencia, por
Leguizamon contingentes.

Luro Esta ley, que no obedece á prin-
Paz cipio alguno en materia de re-
Riquelme clutamiento, tiende á hacer del
Ruiz ejército una masa heterogénea,
Viso compuesta de ciudadanos que se
 alistán obedeciendo á una vocacion por la carrera
 de las armas, de mercenarios seducidos por el ali-
 ciente del enganche, de delinquentes que visten
 el uniforme del soldado como una condena, y, por
 último de ciudadanos que cumplen uno de sus debe-
 res mas nobles y mas sagrados, confundidos todos
 en las mismas filas y en el mismo rango.

Esa ley es hoy completamente insostenible y so-
 lo se esplica como una primera tentativa para re-
 gularizar el reclutamiento del ejército, que habia
 degenerado en lo arbitrario, resintiéndose, sin em-
 bargo, de la influencia de una tradicion vi-
 ciosa.

Pero no solo es contraria á todo sistema regular
 de reclutamiento, sino que llega ya á ser comple-
 tamente ineficaz, á ménos de recurrir al viejo sis-
 tema del contingente, que, imperfectamente legis-
 lado y reglamentado, importaria volver al atraso
 y al arbitrio de otras épocas.

Los alistamientos voluntarios son relativamente
 escasos, como lo son tambien los destinados por la
 justicia desde que los códigos criminales, con so-
 brada razon, han limitado los delitos que pueden
 merecer tal pena, que debe ser borrada por com-
 plete el dia que forme en las filas del ejército un
 solo ciudadano que vaya allí en cumplimiento de
 sus deberes como tal.

Queda solo el enganche, que hasta hoy ha da-
 do los siete octavas partes del personal del ejér-
 cito.

El gran progreso industrial que se opera en to-
 da la República produce mayor demanda de bra-
 zos y aumento de los salarios.

Esto trae como consecuencia inmediata el que
 disminuya el número de los que buscaban en el
 servicio militar una ocupacion, y dejan hoy de
 tener seducciones las sumas ofrecidos como cuo-
 tas de enganche, puesto que el trabajo ordina-
 rio produce jornales de un mayor valor.

El número de enganchados disminuye cada dia
 y puede ya anticiparse que en breve tiempo no
 será posible obtener por ese medio las remontas del
 ejército. El poder ejecutivo se verá, entónces,
 en la forzosa necesidad de pedir á las provincias
 los contingentes necesarios de acuerdo con la ley,
 eventualidad que es necesario evitar por todos los
 medios.

El mas indicado y eficaz es la sancion de la ley
 sobre el reclutamiento y enrolamiento de la guar-
 dia nacional, que el poder ejecutivo tuvo el honor
 de someter á la consideracion de V. H.

El nuevo sistema que ese proyecto establece
 necesita algun tiempo para que penetre en nuestros

hábitos y se aplique con regularidad, y podría
 malograrse si se esperara para su sancion y aplica-
 cion á una época en que las necesidades de la re-
 monta del ejército fueran premiosas y hubiera ne-
 cesidad de obrar con precipitacion.

Ha creido el poder ejecutivo de su deber hacer
 presente á V. H. estas consideraciones y pedirle
 quiera traer á discusion el proyecto presentado
 para que sea sancionado en las presentes sesio-
 nes.

Dios guarde á V. H.

JULIO A. ROCA.
C. Pellegrini.

(A la comision de guerra).

—El señor presidente de la legislatura de San-
 tiago del Estero y el juez de seccion de la misma
 provincia remiten los antecedentes de la eleccion
 de un diputado al congreso.

(A la comision de poderes).

DESPACHO DE LAS COMISIONES

—La de obras públicas se ha espedido en el pro-
 yecto del poder ejecutivo sobre inversion de 600.000
 \$ en la adquisicion de tren rodante para el ferro-
 carril Central Norte.

—La de peticiones, en el mensaje del poder
 ejecutivo adjuntando la solicitud de don Ventura
 Oreiro para establecer una línea de vapores entre
 Buenos Aires y Punta Arenas.

(A la órden del dia correspondiente.)

PETICIONES PARTICULARES

El doctor don Benjamin Gimenez presenta el di-
 ploma que le acredita diputado electo por la pro-
 vincia de Santiago del Estero.

(A la comision de poderes).

—Los señores Runciman y Ca. proponen la cons-
 trucccion de una gran estacion central para los ferro
 carriles de la capital.

(A la comision de obras públicas).

—La señora Tránsito A. de La Madrid solicita
 el pago de haberes devengados.

(A la comision auxiliar de presupuesto).

—El señor José Tomás Guido, nombrado última-
 mente catallero de la real órden de Carlos III, so-
 licita permiso para usar la correspondiente conde-
 coracion.

(A la comision de negocios constitucionales).

—Los señores Alvarez y Arauz solicitan permiso
 para estraer huano de las costas patagónicas.

(A la comision de hacienda).

—Don Francisco Siritto solicita el pronto despa-
 cho de una solicitud anterior, pidiendo una sub-
 vencion para perfeccionar sus estudios de pintura
 en Europa.

(A sus antecedentes).

—Varios fabricantes de azúcar en Tucuman solicitan un aumento de derechos á la introduccion de azúcar estrangera.

(A la comision de presupuesto).

—La señora Rosa L. de Bonifacio solicita pension, como hermana del coronel don Belisario Liendo.

(A la comision de guerra).

—El señor don José Tomás Guido pide permiso para usar la distincion de la Orden del libertador que le confiere el gobierno de Venezuela.

(A la comision de negocios consticionales).

—Los señores Antonio Sirven y Ca. proponen la construccion de dos líneas férreas en la provincia de Buenos Aires.

(A la comision de obras públicas).

—El señor Enrique Rocco Piaggio pide el pronto despacho de una solicitud que presentó el año próximo pasado.

(A sus antecedentes).

—El señor Emilio Gnecco pide la devolucion de una solicitud que presentó el año 1884, reclamando de una resolucion administrativa respecto al título de farmacéntico que le fué conferido por el tribunal de medicina del Paraná, en 1856.

Sr. Presidente—Como es de práctica, se tratará sobre tablas esta solicitud en oportunidad.

PROYECTO DE LEY

El senado y cámara de diputados, etc.

Art. 1º Autorízase al poder ejecutivo á invertir hasta la suma de veinte mil pesos nacionales en la adquisicion de una casa en la ciudad del Rio Cuarto, á efecto de instalar en ella las oficinas de correos y telégrafos.

Art. 2º Este gasto se abonará de rentas generales, imputándose á la presente ley.

*Cárlos S. Tagle—M. A. Espinosa—
T. A. Malbran—F. J. Figueroa.*

Sr. Espinosa—Pido la palabra.

Voy á esponer muy someramente á la cámara las razones que motivan el proyecto que acaba de leerse.

La ciudad de Rio Cuarto ha producido en el año económico de 1885, por renta de correos, una suma al rededor de 40,000 pesos, de los cuales solo se ha invertido en los gastos de administracion, 200 pesos mensuales, ó sean 2400 al año.

Sin embargo de esto, Rio Cuarto no tiene una oficina nacional que responda á las necesidades de su progreso siempre creciente, ni por el valor del edificio en que está ubicada, ni por su situacion, á estramuros de la ciudad.

Por otra parte, la concesion, que es esclusiva, para la construccion del ferro-carril Trasandino, en este trayecto, vá á dárlo por terminado en breve hasta ese punto; y la nacion se verá obligada á establecer una oficina de telégrafo nacional, que ha de irrogar, más ó ménos, en gastos de alquileres, y otros semejantes, una suma igual á lo que se gasta actualmente en correos.

Pienso, entónces, que habria verdadera conveniencia en tener una casa que, por sus condiciones, respondiera al servicio á que se destina, y, al mismo tiempo, traeria una economía considerable en los gastos que para ese objeto es indispensable hacer.

La suma que se destina á la adquisicion del edificio, no representa sino la mitad del producido de aquella oficina, y creo que seria de perfecta justicia hacer la adquisicion de la casa, con beneficio para el tesoro público y con muchísima ventaja para la poblacion donde está ubicada.

Estas son las razones que han pesado en nuestro espíritu para presentar el proyecto que acaba de leerse.

—Apoyado, pasa á la comision de obras públicas.

PROYECTO DE LEY

El senado y cámara de diputados, etc.

Art. 1º A contar desde el 12 de octubre próximo, fíjase en la suma de tres mil pesos el sueldo mensual del señor presidente de la república; en la de mil quinientos el del señor vice-presidente, y en la de mil cuatrocientos el de los ministros de estado.

Art. 2º Este gasto se hará de rentas generales, imputándose á la presente ley, hasta tanto no sea incluido en la ley general de presupuesto.

Art. 3º Comuníquese, etc.

*Cárlos S. Tagle—Belisario Albaracín—Ramon Calderon—C. Villagra—
J. M. Olmedo—Antonio del Pino—
Justino Solari—C. Sosa—Manuel Bermejo—José Fernandez.*

Sr. Tagle—Pido la palabra.

No obstante la justicia que entraña este proyecto y el encontrarse suscrito por un número considerable de diputados, voy á cumplir brevemente con la prescripcion reglamentaria de fundarlo.

La comision de presupuesto, si no hubiera tocado el inconveniente de una prescripcion constitucional que prohibe aumentar ó disminuir los sueldos del presidente, vicepresidente y ministros de estado durante el ejercicio de sus funciones, habria, sin duda, subsanado esta injusticia. No lo ha hecho por la prescripcion constitucional que ha tenido que obedecer.

Todos los sueldos de los empleados de la administracion han sido aumentados en dos ó tres ocasiones, durante el periodo de estos últimos seis años, sin duda por razones muy atendibles, que la misma comision de presupuesto ha hecho valer, ó que ha aceptado por indicacion de algunos señores diputados.

La comision siempre tuvo presente que esos sueldos, que habian sido fijados en una época para la cual eran razonables, venian á ser demasiado exíguos en la que cruzamos.

Dadas las condiciones de vida que tenemos actualmente, es indudable que los sueldos de que gozan el presidente, el vice-presidente y los ministros de estado son demasiado mezquinos.

La comision de presupuesto habia pensado elevarlos en este año como he dicho; pero teniendo en cuenta que la ley de presupuesto no será sancionada antes del 12 de octubre, y que pasada esta fecha no podríamos hacerlo, los diputados que suscribimos el proyecto nos hemos apresurado á proponerlo, para que pueda ser convertido en la ley antes del 12 de octubre y sea agregado al presupuesto que regirá para 1887.

Sr. Presidente—A la comision de presupuesto.

DEVOLUCION DE UNA SOLICITUD

Sr. Presidente—No habiendo mas asuntos entrados, se considerará la solicitud hecha por el señor Gnecco.

—Se lee:

Buenos Aires, julio 30 de 1886.

A la honorable cámara de diputados.

Emilio Gnecco, ante V. H. digo:

Que conviniendo á mi derecho usar de él en otra forma, vengo á solicitar se sirva V. H. ordenar la devolucion de la solicitud que presenté en mayo 30 del 84.

Por tanto, á V. H. pido se digne resolver en conformidad.

Emilio Gnecco.

Sr. Presidente—Se leerá la carátula que tiene el espediente á que se hace referencia.

—Se lee:

«Don Emilio Gnecco reclama de una resolucion administrativa, respecto al título de farmacéutico que le fué conferido por el tribunal de medicina en el Paraná, en 1856.»

—Se vota si se devuelve ó no la solicitud, y resulta afirmativa.

ORDEN DEL DIA

ORGANIZACION DE LOS TRIBUNALES

Sr. Presidente—Estaba en discusion el artículo presentado por el señor diputado por Salta, doctor Ruiz de los Llanos.

—Se lee nuevamente el artículo propuesto.

Sr. Lubary—Pido la palabra.

La comision de legislacion se espedirá muy pronto respecto al proyecto de ley de imprenta presentado por el señor diputado Villamayor, proyecto que existe en su carpeta y de cuyo estudio se ocupa actualmente.

Creo, por lo tanto, que seria innecesario sancionar este artículo, que pone en vigencia una ley que tiene tantos defectos, como pueden atestiguarlo todos los que la conocen, cuando la cámara se ocupará en breve de otra que se armoniza mas con las necesidades que va á satisfacer.

Probablemente el señor diputado por Salta, como no forma parte de la comision de legislacion, no conocia este antecedente. Queria suministrarlo á la cámara para que lo tenga presente al votar respecto de este punto.

Sr. Yofre—Pido la palabra.

No sé, señor presidente, si la comision ha aceptado la redaccion indicada por el señor diputado por Salta.

Noto que se propone votar el artículo formulado por la comision, y entendia, por la pequeña discusion que tuvo lugar días pasados, que ella no habia manifestado asentimiento explícito de la modificacion propuesta, sino que tan solo habia diferido su discusion para mas tarde.

Sr. Presidente—Entendia que nó; pero encontrándose aquí presente el miembro informante de la comision, podria dar este antecedente á la cámara; si la comision acepta ó rechaza la reforma propuesta por el señor diputado Ruiz de los Llanos.

Sr. Colombres—No la acepta, señor.

Sr. Yofre—Voy á oponerme tambien á la mocion formulada por el señor diputado por Salta, sobre la que tantas veces ha insistido él en esta cámara.

Desde luego, señor, se nota la situacion anómala en que viene á colocar á la cámara esta mocion.

A propósito, como dije antes, de una ley de forma, de una ley sobre organizacion de los tribunales, se trata de intercalar una ley de fondo, una ley sustantiva sobre tan importante materia.

Creo que debemos darnos cuenta de la

trascendencia de este asunto y del estado actual de la cuestion, para poder apreciar con acierto las consecuencias á que podria llevarnos la aceptacion de esta modificacion.

Otro de los inconvenientes ú otra de las irregularidades que se notan en ella, es que si se aceptase, incorporaríamos dos leyes, la de 1822 y la de 1828, que no han pasado por el procedimiento ordinario fijado por el reglamento para las que sanciona el congreso; no habría estudio ni despacho de comision sobre ellas, ni habrían sido traídas á discusion al seno de la cámara.

La tercera irregularidad en que incurriríamos, sería traer leyes de tiempos tan remotos para incorporarlas á la época adelantada en que nos encontramos.

Creo que nada hay tan delicado como la organizacion de la prensa diaria en los países regidos por instituciones libres. Nada tan difícil como fijar esa línea de interseccion entre las libertades que todo habitante tiene para esponer sus ideas por la prensa y el derecho de los poderes públicos para controlarlas, tutelando los intereses particulares y los intereses colectivos de la sociedad.

La prensa fiscaliza los actos del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial, de toda la administracion del país. Su ojo penetrante escudriña los mas recónditos lugares y fotografía en sus páginas la vida diaria, con sus retardos ó sus progresos, con sus luces y con sus sombras.

La prensa actual, señor presidente, presenta al escritor, no en el escenario limitado de otros tiempos, reducido al recinto de la ciudad ó país donde se escribía, sino en el vasto escenario del mundo. Ella es el barómetro que fija y marca la atmósfera política y moral de los pueblos, y anuncia con anticipacion las tempestades sociales.

Si se observa las conquistas hechas por la prensa en estos últimos tiempos, se verá que ella, auxiliada por el vapor y por la electricidad, ha venido á dar alas al pensamiento humano y á trasmitirlo de un continente al otro continente con vertiginosa rapidez. Aun mas: puede decirse que la prensa ha adquirido hoy el don de ubicuidad, pues hora por hora puede trasmitir en sus despachos telegráficos los acontecimientos mas dignos de atencion que se producen en el mundo. Tan grande transformacion en ese instrumento de publicidad, ha venido á hacer de la prensa una institucion tan poderosa, que no ha podido menos de influir profundamente en la civilizacion moderna y de llamar la atencion de los hombres de estado.

Si alguna ley debe ser la espresion de la época en que se dicta, es indudablemente la ley de imprenta.

Desde luego, señor, ¿cómo podríamos nosotros hacer revivir en esta época las leyes de 1811 y 1822?

No sé si los señores que sostienen esa mocion y que nos incitan á cometer ese anacronismo, han reflexionado bastante sobre la inmensa distancia á que nos encontramos de aquellos lejanos tiempos.

Si estudiamos la sociabilidad argentina de entónces, encontramos que el comercio, en sus relaciones de carácter interno, era servido por el sistema de vias de transporte mas primitivo; y en sus relaciones internacionales, era servido por buques de vela muy poco desemejantes de las carabelas en que vino Colon en 1492.

Si nos fijamos en nuestros antecedentes políticos, encontramos que el pensamiento dominante en el país en 1811, era hacer triunfar la revolucion de Mayo.

La prensa fué entónces declarada libre, pero libre para los patriotas, no para los españoles; libre para defender, no para combatir nuestra gloriosa emancipacion.

Esa fué la ley de 1811.

En 1822 los pueblos se proponian establecer gobiernos fuertes, omnímodos, despues de la anarquía en que desde 1820 se encontraba sumida la nacion.

Recordaré á este propósito que en aquella época tuvo diez gobernadores en un solo año la provincia de Buenos Aires, y que el señor don Martin Rodriguez, que tenia por ministro á Rivadavia, obtuvo facultades extraordinarias para perseguir los abusos de la prensa; el señor Rivadavia, en un mensaje presentado á la legislatura, encomiaba la nueva ley de imprenta y se prometia de ella inmensos beneficios para la sociabilidad.

Esa era la ley de imprenta de 1822, qué hoy se trata de hacer revivir.

Y yo pregunto: ¿esa ley puede regir para la prensa diaria de la actualidad? Creo que ese molde es demasiado estrecho, para fundir en él la organizacion de esta grande institucion social.

¿Qué se contesta, qué se dice para fundar la mocion? Se dice que ella tiene por objeto darnos el beneficio del jurado.

Pero el jurado no es un mito; es una institucion real; el jurado puede ser bueno ó puede ser malo, segun la organizacion que se le dé. El jurado mal organizado puede ser funesto á las mismas libertades que se trata de garantir.

Recordaré, con este motivo, que hombres de gran sentido, hombres muy instruidos de este país, han atribuido el desprestigio del jury de imprenta entre nosotros, justamente á la organizacion que le dieron esas leyes que por esta mocion se trata de reproducir.

Recordaré tambien que la organizacion del

jurado francés en la época terrible del 93 fué funesta á las mismas libertades que esa revolucion trataba de propagar en el mundo; y que esos mismos vicios del jurado frances se encuentran consignados en la ley del año 28, así como en la ley anterior, que se trata de aceptar. Esas leyes establecen la mayoría de votos para la decision de la pena y determinan que con tres votos disconformes en cuanto á la pena, estando conformes en cuanto á la condenacion, el delincuente será penado segun el voto que fije la pena menor.

Profundos críticos han fundado una de las escelencias de la institucion del jurado en la unanimidad que debe exijirse para la aplicacion de la pena.

Pero para que se vea hasta donde llega la deformidad del jurado establecido por aquellas leyes, me bastará hacer notar la organizacion que le daba el decreto de 1811, reproducida por las leyes de 1822 y 1828.

Dice el artículo 3º del decreto de 1811 lo siguiente: «Para evitar los efectos de la arbitrariedad en la calificación y gradacion de los delitos, se creará una junta de nueve individuos, con el título de *protectora de la libertad de imprenta*...»

Solo por una ironia podia llamarse «protectora de la libertad de imprenta,» cuando tenia por objeto sojuzgar la prensa.

«Serán electores natos el prelado eclesiástico, (es decir, el arzobispo) alcalde de primer voto, síndico procurador, prior del consulado, el fiscal de S. M. y dos vecinos de consideracion nombrados por el ayuntamiento,» etcétera.

Parecen fantasmas, tales son las personas de este jury, espectros, personajes de ultratumba que vienen á este recinto evocados por el poderoso influjo de la mocion que se discute!

Pregunto si en esta forma puede ser sancionada la ley.

Sr. Lainez—¿Esa es la ley del año 28?

Sr. Yofre—Es el artículo 3º del decreto del año 11.

Sr. Lainez—Pero ese decreto está modificado por la ley del año 28, que es la que rige en la actualidad.

Sr. Yofre—Vamos á ver si está modificado.

El artículo 7º de la ley de 1828 dice: «El juicio y castigo del abuso de la libertad de imprenta, en primera y segunda instancia, corresponderá á un jury de cinco ciudadanos sacados á la suerte del modo que se previene en los artículos 3º, 4º y 6º de la ley de 1822.»

El artículo 3º de la ley del año 22 dice: «Las justicias ordinarias, para ejercer la

atribucion acordada en el artículo anterior, serán asociadas de cuatro ciudadanos, sacados á la suerte, de la lista de cincuenta ciudadanos que establece el artículo 3º del decreto de 20 de octubre de 1811, que es el que acabo de leer.

Sr. Lainez—De los cincuenta ciudadanos que no eran empleados.

Sr. Yofre—Por consiguiente, ese artículo 3º del decreto del año 11 está en vigor, y esa es la forma en que será insaculado el jurado.

Varios señores diputados—No!

Sr. Yofre—Bien.

Estas consideraciones, señor presidente, me hacen votar en contra de esa mocion, y estas consideraciones tambien...

Sr. Mansilla—Ya sabíamos que iba á votar en contra, despues de aquella sesion de marras.

Sr. Yofre—No es estraño que el señor diputado lo supiera, porque tiene el don de la omniciencia y, desde luego, de la adivinacion!

Sr. Mansilla—Algunas veres he adivinado... por ejemplo, en esta.

Sr. Yofre—Y en muchos otros casos tambien, es muy probable.

Votaré, pues, señor presidente, en contra de esta mocion, porque creo que de esta manera cumplo mas directamente con el deber que me impone este puesto.

Pienso, como lo ha anunciado el señor diputado por Corrientes, que si existe al estudio de una comision de esta cámara un proyecto de ley de imprenta, desde hace cuatro años, es deber de esta cámara—sobre todo si se considera tan urgente, como lo considero á mi vez, el dictar para este país una ley de imprenta—es deber de la cámara, decia, recomendar por acto interno de ella, á la comision respectiva, el despacho de ese asunto.

Que ese asunto se traiga á discusion, y entonces dictaremos una verdadera ley de imprenta, en vez de la que vendriamos á dictar si se aceptara la mocion que está en discusion.

He dicho.

Sr. Ruiz de los Llanos—Pido la palabra.

Si no he oido mal al señor diputado que acaba de hablar, me parece que él me ha atribuido grande empeño, grande entusiasmo y decidido calor en el sostenimiento de este artículo propuesto por mí.

Debo empezar por rectificar, en esta parte, recordando al señor diputado que la indicacion del artículo que se ha leído, ha sido una ocurrencia del momento, que no la habia previsto absolutamente.

Siguiendo la discusion de este proyecto y

del despacho de la comision de códigos, nos encontramos, cuando se trataba de los jueces del crimen, con un artículo que creo es el que está en discusion, y que dice así: «Intervendrán los jueces del crimen, en los juicios por jurados, en los casos determinados por la ley de procedimientos; pero no podrán emitir opinion ni votar en las deliberaciones, etc.»

Leído este artículo, hice presente que la disposicion que él contenia era inútil en la práctica, desde que no habia tales juicios por jurado.

Recordé entónces la jurisprudencia establecida por la cámara de lo criminal, segun la cual no está en vigencia en la capital la ley de 1828 ni la de 1822; en una palabra, que no habia tales juicios por jurado; y en fuerza de tales razonamientos, decia: ó es preciso suprimir este artículo, ó debe ponerse de manera que diga algo práctico, algo que pueda aplicarse, porque tal como está en la ley vigente no dice nada práctico, es ocioso, es inútil.

Entónces surgió la idea de poner en vigencia la ley del año 28, que en el primer momento, segun lo confesé paladinamente á la cámara, creí era una ley nacional que debia estar en vigencia, pensando que habia padecido un error sério la cámara de lo criminal al decir lo contrario.

De aquí surgió, pues, mi indicacion, que no he defendido sino para sostener cual es mi conviccion á este respecto.

Creo, como lo dije antes, que vale más tener la ley del año 28, que legisla sobre los delitos cometidos por la prensa, que no tener ninguna ley. Me parece que esto es mas constitucional, mas correcto.

No teniendo, como no tenemos en la actualidad, ninguna ley de imprenta, ninguna ley que se ocupe especial y determinada de los delitos cometidos por la prensa éstos caen bajo el juzgamiento de los jueces del crimen y, por consiguiente, bajo las disposiciones (así es preciso sostenerlo, al menos, so pena de declarar que no hay jueces competentes) del código penal que debe dictarse por el congreso para toda la República.

¿Entienden bien constitucionalmente estos jueces? Contesto decididamente que nó.

Al congreso, como congreso, le está prohibido legislar sobre delitos de imprenta; le está prohibido dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta.

Entónces, pues, el congreso, habiendo dictado el código penal, en la hipótesis de que la hubiera dictado, no puede prever y castigar los delitos cometidos por la prensa.

Es preciso que, en su calidad de legislatura de la capital, dicte una ley especial que

prevea esos delitos, porque, como digo, no puede hacerlo en su calidad de congreso nacional.

Estas consideraciones y otras muchas aducidas en el mismo sentido, y que han de tener presente los señores diputados que me escuchan, me han hecho creer, y continúan haciéndome creer, que es preferible tengamos, para reprimir los delitos cometidos por la prensa, la ley del año 28, á no tener ninguna, á tener lo arbitrario, ó á someter dichos delitos al código penal, cuya aplicacion se resiste necesariamente, dados los antecedentes y las disposiciones de la constitucion.

Por lo demás, creo que la crítica ó censura que el señor diputado que acaba de hablar ha hecho á la ley del año 28, no es justa.

Me parece que el señor diputado ha confundido un poco lo que quedó vigente, segun esa ley, del decreto del año 11 y de la ley del año 22.

No tengo bien presentes sus diversas disposiciones; tampoco las he leído últimamente; pero puedo asegurar á los señores diputados que, mas de una vez, he tenido ocasion de aplicarlas, como abogado, en este mismo foro de Buenos Aires, y puedo garantizarles que no hay absolutamente nada parecido á las disposiciones del decreto del año 11 que nos ha leído el señor diputado. No entra para nada ni el arzobispo, ni la junta, ni la autoridad eclesiástica. Nó, señor.

Promovida la formacion del jurado para conocer de un delito de imprenta, segun la aplicacion que ha tenido en esta capital, durante muchos años, la ley del año 28, el juez ante quien ocurría el querellante llamaba á un comparendo y fijaba un dia para que concurriesen los tres jueces de paz de las parroquias mas antiguas del municipio.

En presencia de estos tres funcionarios y del juez ante quien habia ocurrido el querellante, se hacía la insaculacion de la lista de cincuenta ciudadanos, formada á principios del año judicial por la suprema corte, es decir, por la autoridad mas alta. De esta lista se sacaban los miembros titulares y suplentes del jurado que debia conocer en primera instancia.

No habia absolutamente otra lista; y no hay nada parecido, vuelvo á asegurarlo, á las disposiciones á que hacia referencia el señor diputado.

Esta lista de ciudadanos era formada, como él lo ha dicho, de personas que no tuvieran empleos, que no tuvieran dependencia alguna del poder ejecutivo, que fueran completamente libres, en cuanto es posible, de toda sujestion estraña, las que constituían un tribunal verdaderamente recto y justiciero.

Es con arreglo á esa ley que se ha seguido varios juicios, sin tener, para nada, que invocar los preceptos que parece chocaban al señor diputado por Córdoba, y en nombre de los cuales pedía la no aceptacion de este artículo.

Repito, para concluir, que no tengo empeño en que pase, pero que me parece muy preferible tener esta ley á no tener ninguna.

Correrá, pues, mi mocion la suerte que la cámara quiera darle.

Sr. Carballido—Pido la palabra.

Habia manifestado ántes al señor diputado por Salta, que le acompañaría en su mocion, y á la verdad, señor presidente, que me causa estrañeza ver al señor diputado tan ingrato para con su propia obra.

He asistido á lo que puede llamarse la gestacion de este artículo, propuesto por el señor diputado. He visto toda la decision y todo el calor con que formulaba su proyecto, y es, por eso, para mi mas inesplicable que para nadie esta ingratitud del señor diputado, que casi deja huérfana su mocion.

Ahora, como entónces, yo sostengo y he de votar por el artículo, y quiero fundar brevemente mi voto.

Como acaba de decir el señor diputado por Salta, la cuestion, colocada en sus términos claros y precisos, se reduce á esto: ¿es preferible para la capital de la República no tener ley alguna de imprenta, á tener una, aun cuando no sea perfecta?

Yo no hesito un momento en decidirme por esta última proposicion.

La capital de la República, donde se encuentra condensada la mayor suma de inteligencias, de ilustracion y de preparacion para el g. bierno libre, no puede ni debe carecer de una ley de imprenta. Y no podria ser de otra manera, cuando hay otros centros, otras provincias menos adelantadas, que la tienen.

El señor diputado por Córdoba hacia este argumento, que viene repitiendo hace mucho tiempo, señor: A propósito de una ley sobre organizacion de los tribunales de la capital no es posible sancionar, como un incidente de ella, como uno de sus tantos detalles, otra ley que por el reglamento debe presentarse en forma de proyecto y someterse á ciertos y determinados trámites, para que que merezca su sancion como tal ley.

Comprenderia, señor presidente, esta objecion respecto de mociones que importaran una innovacion una reforma, que importaran traer algo nuevo á la consideracion de la cámara; pero tratándose de una ley como la de 1828, que tiene la sancion y la autoridad de los largos años durante los cuales ha sido constantemente aplicada, yo no me lo esplico.

Cuando se sancionó la ley hoy vigente en

los tribunales, nadie hizo una objecion análoga, y estoy seguro que cuando se dicte la que discutimos tampoco se ha de hacer. Y sin embargo, en aquella ley se decia, y no dudo que se dirá en este proyecto tambien: —Queda vigente en la capital de la República el código penal de la provincia de Buenos Aires y el de procedimientos de la misma.

Se observará, señor presidente, que esta ley de 1828 no es correcta, que ella necesita modificaciones y que debe ser reformada.

Pero es que tambien lo mismo se ha entendido respecto del código penal y del de procedimientos. Tan lo ha entendido así el congreso que desde el primer momento ha proyectado nuevos códigos para remplazar á los que fueron declarados vigentes en la ley de organizacion de los tribunales, y se encuentran ante las comisiones respectivas los proyectos tendentes á ese reemplazo.

Véase, pues, cómo esplicitamense, y sin observacion alguna, en 1881, suando se confeccionaba la ley que hoy rige, para la organizacion de los tribunales de la capital, (y estoy seguro que ahora haremos lo mismo) se sancionaba, prescindiéndose de las formas, leyes que son análogas á aquella á cuya sancion se opone el señor diputado.

¿Qué razones habria, señor presidente, para ocuparnos de la forma cuando se trata de la ley de imprenta, y no ocuparnos del fondo cuando se trató del código penal y del de procedimientos?

Observaba el señor diputado por Corrientes: Se encuentra á estudio de la comision de legislacion un proyecto de ley que vá á despacharse pronto.

Pero yo pregunto á mi vez: ¿qué inconveniente hay en que miéntras no se dicte esa ley tan adelantada, tan perfecta como se dice, se acepte la de 1828, que importa para la capital de la República tener, al fin y al cabo, una ley de imprenta, lo que siempre es mejor, muchísimo mejor, que no tener ninguna?

Se agrega: La sancionaremos inmediatamente.

Pienso que no es muy probable que se sancione tan inmediatamente, y aun me atrevo á temer que no se sancione en todo este período legislativo.

Vamos á tener mucho de que ocuparnos, y casi seguro es que el resto de las sesiones ordinarias lo pasemos tratando los numerosos créditos suplementarios que el poder ejecutivo ha venido á pedir al Congreso.

Ante el peligro, pues, de que no se sancione esta ley que se nos ofrece, tan buena, tan aceptable como se quiera, es preferible adoptar la de 1828 que, como lo decia antes,

tiene, cuando menos, la sancion y la indiscutible autoridad de los largos años durante los cuales ha sido aplicada en la provincia de Buenos Aires; y justamente cuando la provincia de Buenos Aires tenía incorporada á su seno la ciudad que es hoy capital de la nacion.

Si se aplicó entónces bien, como lo observaba perfectamente el señor diputado por Salta, cuando la actual capital de la República formaba parte de la provincia de Buenos Aires, ¿por qué no se ha de aplicar ahora igualmente bien en este mismo centro que ya la conoce desde muchos años atrás?

Y entrando á considerar la ley de 1828, no es tan atrasada como se ha dicho.

En primer lugar, no me voy á ocupar de hacer las rectificaciones á que han dado lugar las apreciaciones del señor diputado por Córdoba. El artículo que ha citado no se aplica, como lo reconoce el señor diputado por Salta. El procedimiento que se ha seguido es el que se ha observado siempre, porque todos han entendido uniformemente que ese artículo tercero que él impugnaba estaba perfectamente derogado.

En esa ley de 1828 están consignadas todas las conquistas á que, para asegurar la libertad de imprenta, podemos aspirar, aun cuando ellas se desenvuelvan de una manera imperfecta.

En esa ley se establece el jurado, que es la gran conquista en estas materias. Se consigna la prescripcion de que se entregue á jueces de conciencia, de que se segregue de los empleados públicos el juicio, el criterio que haya de determinar las penas que se apliquen.

Se divide perfectamente la vida privada de la pública, porque es distinto el carácter que una y otra tienen: á la sociedad no le importa de las miserias del hogar; y, sin embargo, entra en esa legislacion de la prensa el ejercicio de la crítica, la censura de la falta de cumplimiento de los magistrados.

Entra mas: entre la falta de recargo en las penas, que es uno de los principios de esa ley, porque las penas que se aplican por abusos de la prensa no están en las mismas condiciones de las que se aplican en el derecho comun.

Una ley que consignara que las penas fueran mas rigurosas de las que establece la ley de 1828, sostengo que nos haría retroceder en materia de legislacion de imprenta.

Por último, vuelvo á este punto de partida: lo que he propuesto el señor diputado por Salta no importa, decia, declarar que la ley de 1828 es imperfecta, que no admite modificaciones, que no debe corregirse.

Conviniendo, como convengo con el se-

ñor diputado por Córdoba, en que aquella ley puede admitir correcciones, modificaciones, creo que la cuestion es esta: si conviene á la capital de la República tener una ley de imprenta ó no tenerla absolutamente.

Puede citarse este solo hecho como un argumento concluyente: en 1811 se dictó un decreto para dar á la prensa una apropiada legislacion, sino como lo merece ahora, al menos como lo merecia entónces, en nombre de una libertad á que se aspiraba.

En 1886 la capital de la República, completada su organizacion con toda la importancia que ha alcanzado no tiene absolutamente ley de imprenta; y hemos visto que, en ausencia de ella, el juez federal, por un lado, y un juez local de la capital, por otro, han andado discutiendo á quien correspondería el enjuiciamiento de un ciudadano á quien por abuso de imprenta, y cometiéndose otro abuso, se le ponía en la cárcel.

Es esto lo que desearia: tener una ley, no importa cómo. Cuando venga la oportunidad, se modificará la ley que provisoriamente hayamos dictado.

Este es mi propósito: por eso he de votar en favor del artículo propuesto por el señor diputado por Salta.

Sr. Yofre—Pido la palabra.

Simplemente para restablecer la verdad de lo que sostengo, un tanto alterada por las observaciones hechas por el señor diputado que deja la palabra y por el señor diputado por Salta.

Convengo con ellos en la necesidad imperiosa de dar una ley de imprenta liberal para la capital, y, por consiguiente, puesto que estamos de acuerdo en este comun modo de pensar no puedo aceptar, en manera alguna, el dilema que ellos proponen, entre tener una ley de imprenta provisoria ó no tener ninguna.

Entre tener una ley de imprenta provisoria y mala, con todos los defectos que se han señalado, ó tener una ley buena, ó no tener ninguna, hay siempre el medio de tener una buena, y esa ley podemos darla nosotros: está en nuestra propia voluntad dictarla, puesto que existe desde hace varios años un proyecto de esa naturaleza al estudio de una de las comisiones de la cámara.

La cámara puede, en este momento, determinar un plazo para que esa comision se espida, y fijar otro para discutir el asunto.

Así quedaríamos habilitados á fin de dictar una ley de imprenta para la capital de la República.

Sr. Carballido—Eso será la cámara; pero no el senado.

Sr. Yofre—Así, pues, la observacion que estriba sobre este punto de vista, es falaz, no tiene razon de ser.

† En cuanto al provisorio, en él hemos vivido setenta años.

El decreto de 1811 fué provisorio; la ley de 1822, que entregaba á la justicia ordinaria la libertad de imprenta, fué provisorio; la ley de 1828 lo fue tambien; y en 1886 vamos á dar otra ley con el mismo carácter, cuando existe en la carpeta de una de las comisiones del congreso, un proyecto que está esperando la sancion de las cámaras!

Yo no acepto este género de responsabilidad.

Amo, como el que mas, las libertades públicas, la libertad individual y la de la prensa, porque creo que la libertad de la prensa es una de las grandes conquistas de esta época. No seré yo el que vaya á atacar la libertad de la prensa; pero no seré yo tampoco el que, con la sancion de esta ley, vaya á encadenarla *provisoriamente* por setenta años mas.

He concluido.

Sr. Presidente—Se votará el artículo propuesto por la comision: si fuera rechazado, entrará el propuesto por el señor diputado por Salta.

Sr. Ruiz de los Llanos—Supongo que la comision no insiste en su artículo.

Sr. Colombres—Yo entendia que habia quedado rechazado.

Sr. Presidente—He preguntado á la comision si insistia ó no, y en virtud de su manifestacion, es que estaba en discusion el artículo.

Sr. Posse—Debe suprimirse el que está en el proyecto.

Sr. Presidente—Entónces, se votará, si ningun señor diputado hace observacion en contrario, el artículo propuesto por el señor diputado por Salta.

Sr. Calvo—Pido la palabra.

No pensaba, señor presidente, tomar la palabra en este debate, por varias razones, pero, principalmente, porque he sido actor en esta materia y, hasta cierto punto, víctima.

La ley de 1828 fué derogada por la de 1857, que sometió la prensa á las leyes antiguas mas terribles que existian, las de calumnia, libelo, etc.

Sr. Gallo—Son las que rigen.

Sr. Calvo—Por eso es que estoy en contra de aquellas y de estas.

Parami, señor presidente, la cuestion no ha variado.

La provincia de Buenos Aires derogó el año 57 las leyes de imprenta del año 28, que eran las del jurado. El año 57 se empezó á

hacer efectiva la responsabilidad, por reglas que resultaban de las recopiladas, ú otras leyes antiguas.

Actualmente queremos volver al año 28, esponiéndonos á que mas tarde volvamos al 57.

Sr. Mansilla—Es al revés. Estamos en el año 1857.

Sr. Calvo—Permítame que establezca las cosas como yo las veo.

La ley de 1828 fué derogada por la de 1857, que es la que rige; y yo me temo que volviendo á la del año 28, subsistiendo la ley del 57, como queremos hacerlo, no hagamos lo que debemos hacer: una ley especial, pensada, calculada y combinada para las circunstancias, que nos dé las garantías que hemos perdido por la de 1857.

No diré que por la ley de 1828 hubiera mas garantías, porque yo he sido testigo de mil tropelias de ese género, cometidas bajo su vigencia.

Así, pues, ni la ley del año 28, ni la del 57 me convienen, y, en ese caso, si votaré en contra de la comision, porque no veo muy claro el objeto, votaré tambien en contra de la adicion propuesta por el señor diputado, porque tampoco dá el resultado que se busca.

Debemos dictar una ley de imprenta definitiva, meditada y correcta, hecha para garantizar la libertad de imprenta, no para que sirva de pretesto á violencias de uno ú otro partido.

Eso es lo que queria decir.

Sr. Mansilla—Esa ley es muy buena, porque hay diputados que han sido calumniados por la prensa y que con esa ley en la mano han sido defendidos, quedando ilesa su reputacion.

El señor diputado Roca fué defendido en un juicio de imprenta, en la villa de Mercedes con esa ley.

Sr. Presidente—Habiendo retirado su artículo la comision, se va á votar el propuesto por el señor diputado por Salta.

—Se vota y es rechazado.

Sr. Solari—Pido la palabra.

Voy á proponer á la comision un artículo estableciendo un calígrafo para los tribunales.

Casi todos los años se votan fuertes sumas para el pago de trabajos caligráficos. Recuerdo que el año pasado se votaron con ese objeto cuatro ó cinco mil pesos.

Creo, señor presidente, que si creamos en la ley el empleo que propongo, por mas que se gaste, no será tanto como en los años anteriores, resultando así una verdadera economía.

Sr. Posse—Pido la palabra.

Por mi parte no acepto el artículo que propone el señor diputado.

El calígrafo es uno de tantos peritos que los tribunales necesitan para el desempeño de sus funciones.

Con la misma razon que estableciéramos un calígrafo, podríamos establecer un traductor, un maestro mayor, un herrero, y todos los peritos que pueden intervenir en un juicio.

No hay, absolutamente, necesidad de tal calígrafo, porque, cuando es necesario en algun juicio, lo nombran las partes; y hay casos en que cada parte desea nombrar su perito, porque no se conforma con el designado por la otra.

Sr. Solari—Pido la pabra.

La única razon que he tenido para proponer el empleo es esta: que el congreso, todos los años, está votando cuatro ó cinco mil nacionales para pago de calígrafos, mientras que hasta aquí no hemos votado nada para herreros, boticarios, etc.

Sr. Posse—Observe el señor diputado que los calígrafos son nombrados por las partes, como todos los demás peritos. No los costea la nacion.

Sr. Solari—Entónces, ¿para qué hemos votado esas sumas?

Sr. Lainez—Para los pleitos de aduana, que son escepcionales.

Sr. Solari—Yo sostengo mi mocion.

La cámara resolverá.

—Se vota y es desechada.

—Se aprueba sin discusion los artículos 313, 314, 315 y 316.

Sr. Carballido—Pido la palabra.

Creo que para llenar el fin que la comision persigue con la creacion de este boletin, y, al mismo tiempo, para llenar una deficiencia que hoy existe en nuestro código de procedimientos, convendría agregar dos artículos que voy á proponer.

Sr. Calvo—Si el señor diputado me permite un instante.

Para reclamar del señor presidente...

Yo hice dos observaciones en la sesion última, que me parece corresponden á esto de que nos ocupamos ahora, y sobre las cuales quedó la comision en dar su opinion.

Yo la he esperado.

Sr. Presidente—Se la dará cuando pasen estos artículos, si el señor diputado no tiene inconveniente. Entónces se dará á esos puntos la colocacion correspondiente.

Sr. Calvo—En hora buena.

Perdone el señor diputado esta interrupcion.

Sr. Carballido—Los artículos á que me

he referido serían los que voy á dictar en seguida.

Despues del que acaba de leer el señor secretario, el siguiente: «Se publicará igualmente en el boletin judicial el movimiento diario de los juzgados de paz, cámaras de paz, juzgados de primera instancia en lo civil y comercial y cámaras de apelacion. A este efecto, los respectivos secretarios estarán obligados, al tiempo de cerrar sus oficinas, á enviar á la direccion del boletin una nota escrita en que se haga constar los expedientes en que haya recaído providencias á notificarse, espresando solamente los apellidos consignados en las carátulas.»

Actualmente sucede, señor presidente que, con arreglo al código de procedimientos, la mayor parte de las notificaciones deben ser hechas en la oficina á cuyo efecto concurren allí las partes. En el caso de que estas no concurren, se les dá por notificadas, por una simple nota.

La ley ha previsto el caso en que un secretario, faltando á sus deberes, no notifique la providencia recaída, y á este efecto ha consignado una disposicion que dice que cada secretario llevará un libro en el cual tendrán derecho los partes á consignar su presencia.

Como se comprende, esta medida es odiosa, es violenta; y si se tiene en cuenta que cada litigante trata de quedar bien con el secretario, que es el que tramita el asunto y el que activa el expediente, se comprenderá tambien que ella es inútil en la práctica.

Pienso que si se adoptara este artículo, obligando á los secretarios á que publicaran en el boletin los asuntos en que se dictare providencia que hubiese de notificarse, las partes no necesitarian, para no ser víctimas de este abuso, concurrir á la oficina.

Sería, además, mas cómodo para las mismas partes, porque, siendo su obligacion ahora concurrir con frecuencia, si no diariamente, á la oficina, con esta publicacion se ahorrarian ese trabajo, que las mas de las veces es inútil.

Por lo demás, es sabido que todo medio de publicidad contribuye, por la critica, á establecer la contraccion de los magistrados, prescindiendo, en este caso, de las condiciones personales de los que hoy desempeñan la magistratura.

Por otra parte, siendo obligacion de todos concurrir, ó mas bien dicho, suscribirse á esta publicacion, porque conviene á cada uno de los litigantes, no sería difícil que ella, aun cuando escasa, pudiera convertirse en una fuente de recursos.

Estas son las ligeras consideraciones en que fundo estos artículos.

El segundo solo establece que al archivo

general debe llevarse dos ó mas ejemplares del boletín, para que en todo tiempo puedan ser compulsados por los interesados ó por mandato del juez, cuando se susciten cuestiones sobre las publicaciones en él insertas.

No sé si la comision aceptará.

Sr. Colombres—Por mi parte, acepto.

Sr. Caballido—Agregaré otra consideracion.

Se me ha observado que hay tal número de asuntos en tramitacion, que seria carga muy pesada y cosa muy difícil que la publicacion se pudiera hacer correctamente.

Pero pienso que desde que el objeto del boletín judicial es hacer tan completo como se pueda lo que á la secuela de los juicios concierne, no habrá inconveniente en que tal se haga; y puedo dar el antecedente de lo que sucede ahora con un diario de esta capital, *El Censor*, me parece, que publica el movimiento diario de todos los tribunales ordinarios. No habria mas que agregar el de los juzgados de paz y el de las cámaras de paz que esta ley crea.

De manera que no creo que en la práctica haya ninguna dificultad para que esa publicacion se haga correctamente.

Sr. Posse—Por mi parte, acepto tambien.

Sr. Presidente—Estando aceptados por la comision los dos artículos propuestos, está en discusion el primero de ellos.

—No haciéndose observacion se dá por aprobado. Igualmente se aprueba el segundo.

—Sin discusion pasan los artículos 317, 318 (del proyecto del senado) y 319.

Sr. Presidente—Invito á la cámara á pasar á cuarto intermedio.

—Así se hace.

—Vueltos á sus asientos los señores diputados, continúa la sesion.

ASUNTOS ENTRADOS

PROYECTO DE LEY

El senado y cámara de diputados, etc.

Art. 1° El poder ejecutivo contribuirá con la suma de cuarenta y cinco mil pesos (45,000 ps.) para la terminacion del puente carretero mandado levantar por el gobierno de Catamarca, sobre el rio del Valle.

Art. 2° Esta suma será abonada de rentas generales, imputándose á la presente ley.

Art. 3° Comuníquese, etc.

Antonio del Pino.

Sr. del Pino—Pido la palabra.

El proyecto que acaba de leerse responde á una necesidad muy sentida en la provincia de Catamarca.

Anticipándose á él, el gobierno de aquella provincia ha mandado hacer los estudios definitivos de un puente carretero sobre el rio del Valle, y además ha aglomerado muchos elementos de construccion para la realizacion de la obra.

El rio del Valle separa la capital de la parte este de la provincia, que la constituyen muchos y poblados departamentos. Sucede que su cauce sirve de desagüe á las corrientes que bajan de la serranía, las cuales interrumpen con frecuencia el tránsito y la comunicacion que mantiene la capital con las poblaciones del este, y aun con las provincias vecinas, como ha sucedido el verano pasado durante muchos dias, porque por ese rio pasa el camino nacional que pone en comunicacion á Catamarca con Tucuman.

De manera, pues, que se trata de satisfacer, como he dicho, una necesidad imperiosa, de lo que se preocupa tambien aquel gobierno actualmente.

Por el proyecto que presento solo se acuerda un pequeño subsidio con ese objeto.

Estas son las razones que espongo por ahora para solicitar el apoyo de mis honorables colegas, á fin de que el proyecto de que se ha dado lectura pase á comision.

—Suficientemente apoyado se le destina á la comision de obras públicas.

ORGANIZACION DE LOS TRIBUNALES

Sr. Presidente—Continúa la consideracion del asunto pendiente.

Está en discusion el artículo propuesto por el señor diputado Calvo, que se va á leer.

—Se lee:

«Los actos ó contratos autorizados por los escribanos de la capital de la nacion, de bienes raices existentes en territorios de las provincias federadas, no necesitarán de mas requisito ni formalidad para las inscripciones en los registros de propiedad é hipotecas, etc., de dichas provincias, que la sola legalizacion de la firma del escribano que los autorice, declarándose sin valor legal alguno cualquiera otra disposicion que contraviniera la presente.»

Sr. Colombres—Pido la palabra.

La comision ha tomado en consideracion el artículo propuesto por el señor diputado Calvo, y me ha encargado manifieste á la

cámara que, con sentimiento, no puede aceptarlo.

Al fundarlo, el señor dipudo manifestaba que su propósito era completar el artículo 7º de la constitucion....

Sr. Calvo—Reglamentar...

Sr. Colombres—... reglamentar el artículo 7º de la constitucion, que establece que los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozarán de entera fé en las demas, y que el congreso, por medio de leyes, podrá determinar la fuerza probatoria de esos actos y los efectos legales que producirán.

La comision ha considerado que no hay necesidad de una nueva reglamentacion de ese artículo, porque ya está hecha en la ley de 26 de agosto de 1863.

Esa es la razon porqué no acepta el artículo.

Sr. Calvo—Pido la palabra.

La comision me permitirá que le haga una interrogacion.

Si está contenido mi proyecto en la ley de 26 de agosto de 1863, lo que la comision quiere evitar es una redundancia; pero en cuanto al principio ¿está de acuerdo? Es decir: ¿considera á la capital como una provincia, y desea que la capital tenga iguales derechos é iguales deberes que las provincias, y que sus actos judiciales y procedimientos sean regidos por la misma ley?

Sr. Colombres—Sí, señor, de completo acuerdo.

Sr. Calvo—Muy bien.

En la repulsa que la comision hace de mi proyecto, yo veo un anacronismo.

La ley del 63 ha sido dada para las provincias.

Despues del 63 se han creado otras entidades políticas que hacen parte constitucional del país, como, por ejemplo, los territorios federales y la capital nacional.

Si la única observacion de la comision es la ley del 63, como esta ley solo se refiere á las provincias, porque es lo único que nombra, en sus relaciones interprovinciales, me parece que no es redundante incluir los territorios nacionales, que han sido creados despues, y la capital nacional, que es una creacion especial, propiamente invencion argentina, pero que ha venido poco á poco á hacerse una provincia, puesto que tiene su representacion política, sus senadores, etc., etc., y nosotros mismos, que somos el cuerpo legislativo de esa capital.

Repito que si la razon que la comision tiene para rechazar el proyecto no es mas que esa, si no es otra, declaro que ella no es suficiente.

Sr. Posse—Pido la palabra.

Sr. Calvo—Continuaré en seguida, porque yo tengo otros tópicos.

Sr. Posse—Creia que habria concluido.

Sr. Calvo—No, señor.

Pero si el señor diputado va á hacer otra observacion, prefiero callar, porque respecto de la primera ya he contestado lo suficiente. Despues que el señor diputado me haga el honor de presentarme otra observacion, trataré de refutarla, si está en mi poder hacerlo.

Sr. Posse—En la suposicion, señor presidente, de que pudiera creerse que la capital de la República no está comprendida en la ley de autenticacion de 1863, es á esa ley, mas bien, que el señor diputado debiera proponer la enmienda, pero no á una ley enteramente distinta, á una ley que no tiene por objeto sinó organizar los tribunales de la capital.

En la ley de 1863 se establece las formalidades mediante las cuales, no solo los actos judiciales, sinó los actos administrativos de una provincia, merecen fé completa en todas las demas.

Por consiguiente, si el señor diputado cree que en esa ley no está comprendida la capital, porque la ley se dictó en 1863 y la capital ha sido establecida definitivamente en 1835, repito que es á esa ley que debe proponer la enmienda, para evitar así el inconveniente de que una ley de una naturaleza dada, con un objeto determinado, pueda ser modificada, y lo sea, en leyes enteramente distintas y que tienen propósitos diversos.

Además, el artículo, tal como lo propone el señor diputado, seria inaceptable para la comision, aun cuando se tratara de reformar la ley de autenticacion, porque el señor diputado dice que los actos producidos en la capital de la República, con la autenticacion debida, se hallarán en forma viable como para que sean inscriptos en el registro de hipotecas y de propiedad en las demás provincias.

En muchas provincias no hay registro de propiedad. En Córdoba, que es una de las principales, por su importancia y por su ilustracion, hay una especie de registro de propiedad, que está muy lejos de ser una oficina completa. Y creo que en las demás provincias no existen tales registros de propiedad.

Por consiguiente, el artículo no puede tener allí aplicacion.

Dice tambien el señor diputado que estas escrituras de enagenacion se inscribirán en el registro de hipotecas.

Nunca se inscribe en el registro de hipotecas otra cosa que las hipotecas.

Sr. Calvo—Es claro! Pon eso se llama de hipotecas.

Sr. Posse—Como en el artículo propuesto por el señor diputado se dice que se inscribirán en el registro de propiedad y de hipotecas...

Sr. Calvo—Respectivamente. Es de advertir que se usa generalmente

Sr. Posse—Es que solo se puede inscribir ó registrar en el registro de hipotecas la constitucion ó cancelacion de una hipoteca, nó la enagenacion de una finca.

Sr. Calvo—Pero sí eso es elemental!

Por muy escaso de conocimientos de derecho civil que me crea el señor diputado....

Sr. Posse—Por eso creo que el artículo del señor diputado es un *lapsus plumi*.

Sr. Calvo—Puede ser mas bien un *lapsus linguae* el del señor diputado.

Sr. Posse—Eso lo dice el señor diputado.

Señor secretario: ¿Quiérete tener la bondad de leer el artículo propuesto?

Sr. Calvo—Faltará alguna preposicion ó algun adverbio....

—Se lee.

Sr. Posse—Lo que se hace, señor presidente, en varias provincias cuya legislacion al respecto me es conocida, no es registrarse estas escrituras en los registros de propiedad, que no existen, sinó protocolizarse en los protocolos de los escribanos públicos y hacerse, como decia antes, la inscripcion en el registro de hipotecas, cuando se ha constituido ó cancelado una hipoteca; pero nunca cuando se trata del acto de enagenacion de una propiedad.

Así es que la comision no acepta el artículo del señor diputado, por creerlo inoportuno en esta ley. Seria propio, en todo caso, de la ley de 1863, que tenia por objeto establecer las formalidades con las cuales los actos judiciales y administrativos de una provincia merecen completa fé en las demás.

Sr. Calvo—Pido la palabra.

Para contestar al señor miembro informante de la comision, me basta la lectura del artículo 311 del proyecto que se discute, la cual pido al señor secretario.

—Se lee.

Sr. Calvo—Aquí está aprobada la lógica con que he introducido mi artículo en el proyecto, con el número 212. Habla el artículo leído, de los tribunales de la capital, y el mío se refiere tambien á los escribanos de la capital.

Por consiguiente, no hay la falta de lógica de que se me acusa, y creo, por el contrario, que este es el lugar espresamente designado para colocar mi artículo.

Además de eso, la ley toda es orgánica de los tribunales de la capital...

Sr. Colombres—Puramente local.

Sr. Calvo—Y precisamente por eso me refiere á las escrituras hechas en la localidad, por escribanos de la localidad. Luego, es eminentemente local.

Sr. Ruiz de los Llanos—Pero su mandato se aplica á las provincias; es espresamente para ser obedecido en las provincias.

Por consiguiente, no tiene nada que hacer con la justicia local.

Sr. Calvo—Si el mandato no es obedecido en las provincias, es por las razones constitucionales que voy á dar.

Sr. Ruiz de los Llanos—Yo le digo que no tiene nada que ver con la justicia de la capital una disposicion que debe ser aplicada en las provincias.

Sr. Calvo—Sí, señor; será aplicada cuando el caso llegue, como todas las prescripciones constitucionales, segun su progresion.

Sr. Colombres—Pero la legislatura local de la capital como es el congreso en este caso, no puede hacer eso.

Sr. Calvo—Este congreso tiene dos caracteres: es legislatura nacional y es legislatura provincial; y estos dos caracteres puede desempeñarlos concurrente ó alternativamente.

Sr. Colombres—En este caso es exclusivamente local.

Sr. Calvo—Pero debemos tratar de determinar bien los dos caracteres en el punto en que nos encontramos.

Voy á esponer mis ideas al respecto, declarando que no tengo otra mira que la de salvar los principios constitucionales, que creo desatendidos.

Para mí, lo que está pasando ahora es completamente anti-nacional, son los recuerdos de un pasado que ha sido para nosotros luctuoso. Es decir, se está considerando á cada una de las provincias como país extranjero, se está sujetando recíprocamente los documentos emanados de esas provincias ó de la capital á los mismos procedimientos á que se sujetan los documentos que vienen de Francia ó de Inglaterra, lo que no es correcto.

Si en Europa se hace la venta de un territorio ubicado en la República Argentina, yo comprendo perfectamente la nueva protocolizacion, el nuevo pago de sellos, etc., que se exige en nuestro país. Lo acepto y me inclino á declararlo bueno, ante la necesidad de hacerlo así. Pero que en una misma nacion, compuesta, como la República Argentina, de catorce provincias y de una capital, hagamos una distincion tan marcada por un límite

que es casi nominal, para que, llegándose á Belgrano, se pague dos, tres ó cuatro veces el impuesto que se ha pagado en la ciudad de Buenos Aires, sobre el papel sellado y los demas detalles exigidos por la ley, es perfectamente injusto, á mi juicio, y completamente inconstitucional.

Lo que quiero, pues, es salvar mi propia responsabilidad como diputado.

Creo que la cámara no debe tolerar este estado de cosas, por el que hoy se encuentran algunas provincias argentinas equiparadas á las naciones extranjeras y cobrándose recíprocamente impuestos ya pagados.

El artículo 7º de la constitucion, á que yo me refiero, me parece tan concluyente que basta su simple lectura para probar mi tesis.

Dice: «Los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia (aquí es necesario agregar: *y de la capital*, como se ha hecho en otras leyes; pero esto no puede hacerse sin una reforma) gozan de entera fé en las demas.»

¿Qué significa esta fé? Significa que es completo el documento en una y otra provincia.

Y sin embargo, si se va á la provincia inmediata, es necesario que se repita la misma tramitacion; es necesario que se pague el triple ó el doble de los gastos hechos en la capital de la República, por ejemplo, donde se haya verificado la venta. No obstante, dicha venta ha sido hecha dentro de la misma nacion, en el mismo país y al amparo del mismo artículo 7º de la constitucion.

Esto no es legítimo.

Despues dice el artículo constitucional: «y el congreso puede por leyes generales determinar cual será la forma probatoria de estos actos y procedimientos, y los efectos legales que producirán.»

Replica la comision: Se ha hecho ya el año 63, y no ha sido incluida la capital. Y yo contesto á eso; entonces no existia la capital y se ha hecho necesario incluirla en las leyes posteriores.

Los territorios nacionales tampoco existian en 1863, y, por consiguiente, no han podido ser incluidos, puesto que no podian entrar en una legislacion de hace veintitres años.

Pero, señor presidente, en este artículo se encuentra mas palpable la imitacion que hemos hecho y que seguimos haciendo de la constitucion norte americana; y si hemos imitado el testo, es claro que debemos imitar tambien la interpretacion del testo, y que es nuestra conveniencia, nuestro interés, y talvez nuestro deber aceptarla.

El artículo 4º de la seccion primera de

la constitucion norte-americana dice: Entera fé y crédito serán acordados en cada estado á los actos públicos, archivos y procedimientos judiciales de todos los otros estados; y el congreso puede por leyes generales, determinar el modo en que tales actos, registros y procedimientos se probarán y los efectos de ellos.»

Es exactamente la misma cosa, con palabras diferentes, pero en el mismo sentido.

Cómo ha entendido la suprema corte de los Estados Unidos este artículo, que es igual al que he leído, voy á decirlo.

«Esta disposicion, dice, tiene por objeto impedir la debilitacion de los vínculos de la union federal, como pudiera suceder si los estados discutieran lo que se deben recíprocamente,» etc.

Despues continúa en una serie de sentencias, que no leeré á la cámara porque tiene en sus manos el medio de conocerlas: están en la página 168 del segundo volumen de las «Decisiones constitucionales de los Estados Unidos», que he tenido el honor de ofrecer á mis honorables colegas.

Por consiguiente, teniendo aquí las diferentes sentencias que al punto se refieren, se encontrará evidentemente la prueba de que la interpretacion constitucional dada en los Estados-Unidos es idéntica á la que pido, y que no es necesario hacer nuevos gastos, ni nuevos títulos ni dilatar tres ó cuatro meses para que la circulacion de los valores y la trasmision de la propiedad sea inmediata, como debe serlo en un país como el nuestro, compacto, unido, á pesar de las divisiones nominales que para cada provincia existen á este respecto.

Aunque constitucionalmente no puede quedar duda de esto, puedo citar á la cámara las leyes de los Estados-Unidos que han reglamentado este artículo.

Las secciones 905 y 906 del registro oficial revisado, *Revised Statutes, 1878*, son terminantes, no admitiendo la mas mínima duda. Por consiguiente, venimos, segun he oido al señor diputado, á estar conformes en el punto constitucional. Todas las disposiciones constitucionales son iguales en esa parte, y entonces la diferencia solo consiste en qué ley se ha de entrar á su reglamentacion. Si á ésta no corresponde, puede hacerse en otra; no tengo el mínimo inconveniente. Para mi, el objeto es establecer que todas las provincias son iguales, que ninguna tiene el derecho de desconocer en lo mínimo lo que se ha hecho convenientemente en otra, que estas separaciones que se hacen por una tramitacion inconstitucional no tienen razon de ser.

Y si estamos conformes con respecto á la

tramitacion que debia seguirse, voy á tomarme la libertad de demostrar á la cámara lo que pasa en este momento, para que pueda apreciar la gravedad del caso.

Tengo una lista que me ha dado uno de los escribanos de la capital, el señor Salas, de casos en que ha tenido que pagarse dos, tres y cuatro veces el impuesto que en la capital se habia ya pagado.

El señor Juan P. W. Birch 150,000 \$. Francisco Bustamante 200,000, Manuel Salas 30,000, José Lavarello, José P. Seeberg, Federico L. Gutierrez 180,000, Honorio Acevedo 120,000, Pedro L. Funes 120,000, José M^a. Juarez y Nicolás Soreto 100,000. Esta es la lista de las escrituras hechas en la capital de terrenos en la provincia, que han debido hacerse otra vez en La Plata, con grandes costos. Y últimamente creo que hay pendiente algun reclamo sobre el asunto ante la corte Suprema.

Bien; ¿cómo podemos esplicarnos esto, si cada una de las provincias establece que cada compra-venta hecha en la capital de un bien raiz situado en territorio provincial ha de volver á escriturarse en su respectivo registro de propiedad, ó á protocolizarse, ó como quiera entenderse? Volvemos á la segregacion.

Yo pregunto al señor diputado Fernandez, que tiene el registro de propiedad á su cargo, si registra ó no las ventas que se hacen en las povincias, sin sugetarlas al pago de sello en la capital.

Sr. Fernandez—Se registran sin pago de sello.

Sr. Calvo—Luego, cada una de las provincias debe hacer otro tanto: ahí está la reciprocidad.

Si esta capital registra el título otorgado en otra provincia, en el registro de propiedad, sin pago de nuevos sellos, ¿por qué razon tal ó cual provincia ha de imponer á los contratos que se celebran en la capital el pago del uno por mil, por ejemplo? Está claro que á los de la capital no se lo debian imponer.

Sr. Gallo—Si se paga en la capital!

Sr. Calvo—El señor diputado Fernandez me acaba de decir que no se paga doble.

Sr. Ruiz de los Llanos—Es que no se ha dado cuenta bien de la pregunta.

Sr. Fernandez—No se celebran las hipotecas en la forma que dice el señor diputado.

Sr. Calvo—El señor diputado puede hacer las preguntas que quiera; las mías no son las del señor diputado.

El señor diputado ha hablado de hipotecas: yo no las he mencionado.

Y voy á demostrarle cómo se halagan con una esperanza ilusoria si creen que han de

fundar un banco hipotecario nacional con este régimen.

Yo pregunto de nuevo al señor diputado, si en el caso de hacerse la venta de una propiedad radicada en La Plata ó en Córdoba, y en el caso tambien de traerse dicha venta á inscribir en el registro que regentea el señor diputado, toma nota de ella, ó hace que vaya á protocolizarse ante un escribano.

Sr. Fernandez—Yo no tengo el registro de propiedad, sino el de hipotecas.

Sr. Calvo—La operacion no varía; puede ser un contrato, puede ser una hipoteca, puede ser con pacto de retroventa, puede ser de todas las maneras que se quiera: estamos hablando de actos judiciales en su generalidad, no en su especialidad. No es específica mi pregunta.

Sr. Fernandez—Cuando se trata de tomar razon de una escritura celebrada fuera de la capital, se presentan al juez, y el juez manda que el escribano tome razon.

Esta es la práctica constante.

Sr. Calderon—Cualquier acto celebrado en las provincias, que deba ejecutarse en la República, está libre de sello nacional: basta con el sello provincial que ha pagado donde se verificó.

Sr. Calvo—El señor diputado responde á mi pregunta. Luego, si este es el caso, mi argumento es concluyente.

En la capital no pasa lo que en las provincias á que aludo, es evidente. Entónces, ¿cuál es la razon por qué la capital ha de conducirse con tanta generosidad, y cada una de estas otras provincias ha de continuar siempre considerando á la capital como parte integrante de un país extranjero?

Sr. Calderon—Tendré el placer de espiárselo.

Sr. Colombres—Es cuestion de generosidad ó de poder ser generosos.

Sr. Calvo—Yo no entiendo la cuestion de generosidad en materia constitucional. Esta ley del 63, yo no la rechazo; lo único que deseo es que se encuentre un medio de estenderla á la capital.

Si la comision encuentra un medio, ó si quiere que nos reunamos despues para buscarlo, tendré el mayor placer en ponerme á su disposicion.

Sr. Colombres—La ley de 1863 está en vigencia.

Lo que puede suceder es que se la considere incluida entre las leyes de procedimientos que se han declarado vigentes en la ley orgánica sancionada; pero esa ley rige actualmente en la capital.

Sr. Calvo—La conozco, porque se la estoy citando.

Sr. Colombres—Como el señor diputado hablaba de que no se cumplía...

Sr. Calvo—El señor diputado sabe que hay dos modos de estar una ley en vigencia. El uno, es cuando la ley es prácticamente obedecida, y el otro, es cuando no es practicada aunque esté en vigencia.

Esta dualidad del modo de obedecer las leyes, sin cumplirlas, no me basta.

La ley de 1863 dice esto: «Los actos públicos, procedimientos, sentencias y demás documentos de que se habla en los artículos anteriores, autenticados en la forma que en ellos se determina, merecerán tal fé y crédito y surtirán tales efectos ante los tribunales y autoridades dentro del territorio de la nacion, como por uso y ley les corresponda ante los tribunales y autoridades de la provincia de donde procedan.»

Luego, si proceden de la capital, idéntica cosa debe decirse de la capital.

Esto me parece que es sumamente claro.

Así, el argumento del señor senador.... del señor diputado, (espero que sea senador mas tarde) me parece que es enteramente á mi favor, puesto que dice que existe aquí, para la capital, exactamente aquello que para las provincias se determina por la ley del 63.

Esta ley, entónces, no ha podido, como he dicho, incluir á la capital ni á los territorios nacionales, porque no eran entónces divisiones administrativas ni políticas. Está implícito, pero no espresado el caso.

Señor presidente: despues de haber establecido cuál es el derecho constitucional, con lo que parece que la comision está de perfecto acuerdo...

Sr. Posse—Sí; con el derecho constitucional como ella lo entiende.

La comision está muy lejos de acompañar al señor diputado.

Sr. Calvo—Deploro que esté tan lejos de la constitucion.

Sr. Posse—La comision no está lejos de la constitucion, sino que la entiende á su modo.

Sr. Calvo—Quiere decir el señor diputado que está lejos de mí, y cerca de la constitucion?

Sr. Posse—La comision entiende que una cosa es autenticar un acto para que se le preste fé en otra parte, y que otra cosa es cobrar gabelas, impuestos ó derechos.

La comision créa, porque ha estudiado el derecho de su país y las resoluciones de nuestra corte suprema, (que deben valer algo mas que las resoluciones de la corte suprema de países extranjeros), que no puede estar en desacuerdo con las resoluciones de aquel alto tribunal, porque ellas se basan

en los principios fundamentales de nuestra constitucion.

Así, pues, es la ley del lugar, *lex loci*, la que rige las enagenaciones de la tierra.

Sr. Calvo—Afortunadamente, entiendo ese latin.

Sr. Posse—Por si acaso no lo entendía, se lo traduje antes.

Sr. Calvo—Gracias. Lo había leído en Story, en el *Conflicto de las leyes*.

Sr. Posse—Es, pues, repito, la ley del lugar la que rige la enagenacion de la tierra.

El señor diputado, so pretesto de autenticacion, que no atañe mas que al crédito que á un documento se debe dar, quiere cercenar á las provincias el derecho que tienen de gravar los actos de enagenacion de la tierra sobre que tienen plena jurisdiccion.

Sr. Calvo—¿Me permite una palabra?

Sr. Posse—Sí, señor.

Sr. Calvo—Siempre que la trasmision de la propiedad tiene lugar en el territorio provincial donde está ubicada, estamos de acuerdo.

La cuestion es si se deben pagar dobles impuesto sobre la trasmision de la propiedad provincial cuando el contrato se hace en el territorio de la capital. Esta es la dificultad.

Sr. Posse—Si se trata de impuestos, donde no debe cobrarse el impuesto es aquí, cuando se enagena tierra de Santiago ó Catamarca, porque el impuesto es al acto de la enagenacion.

Sr. Calvo—Ahí está la *lex loci*: donde el contrato se celebra, señor abogado! Allí es donde tiene lugar la trasmision de la propiedad.

Sr. Posse—Lo que se llama ley del lugar no es donde se celebra el contrato, sino donde está la tierra que se vende, señor.

Sr. Calvo—Perfectamente: donde se hace la venta.

Sr. Posse—Pero ¿cómo perfectamente, si está diciendo que la *lex loci* es la ley del lugar de la celebracion del contrato?

Sr. Calvo—Vea la habilidad, y sin embargo es necesario...

Sr. Posse—Esto es lo que deberia hacerse gratis aquí; y no hacer en Buenos Aires en papel sellado la enagenacion de una propiedad que se encuentra en Jujuy.

Pero el señor diputado quiere quitar á Jujuy el derecho que tiene de cobrar un impuesto á la enagenacion de la tierra situada en su territorio, á cambio de la tutela que ese estado ejerce para garantir esa propiedad, por medio del escribano, de los protocolos, de la oficina de hipotecas, etc., que mantiene.

La corte suprema ha resuelto un caso que voy á referir al señor diputado.

Se hizo en la ciudad del Rosario (provincia de Santa-Fé) la enagenacion, por escritura pública, de terrenos valiosos situados en el departamento de Río IV (provincia de Córdoba).

El enagenante, que no era de muy buena fé, posteriormente hipotecó esas mismas tierras, como si aun las conservara. La hipoteca se registró en Córdoba, donde no estaban protocolizadas las escrituras de enagenacion.

Vino el caso de ejecutar la hipoteca, y entónces el dueño de la escritura de enagenacion se presentó entablado tercera de dominio. El juez de Córdoba falló en contra de sus pretensiones, y la suprema corte confirmó su sentencia.—La confirmó fundada en consideraciones mas ó menos análogas á las que estoy aduciendo ante la cámara. Y despues vino la corte á agregar otra consideracion, y dijo: Por la ley tal de la provincia de Cordoba, se ordena que la trasmision de la propiedad situada en ella, no se haga sino en virtud de escritura registrada allí, y como no está registrada la escritura en cuestion, no está hecha la trasmision.

Véase cómo es necesario que la ley del lugar de la tierra se cumpla.

Así, pues, en ninguna provincia, ni aquí mismo, será eficaz ninguna escritura, por legal que sea, mientras no esté protocolizada, porque es la única manera de garantizar los derechos. Si el que vende una propiedad que tiene en Córdoba, encuentra que el comprador no va á protocolizar allí la escritura, puede estar defraudando á todo el mundo, viéndola de nuevo.

Entónces, las provincias, que son las que dispensan esta tutela, esta proteccion á la tierra, tienen el mas perfecto derecho de cobrar impuestos cuando esa tierra se enagena, donde quiera que la enagenacion se haga.

Pero repito á la cámara, que el señor diputado, tan pronto nos habla de autentificacion, que quiere decir rodear á un documento de ciertas formalidades para que haga fé donde quiera, y tan pronto nos habla de que lo que quiere es escepcionar de impuestos en las provincias á los documentos que se estienden aquí.

Lo uno es diferente de lo otro.

Sr. Calvo—Pero si el señor diputado quiere hacer la confusion, claro está que no se lo puedo impedir.

Sr. Posse—Es por esto que la comision entiende la constitucion á su modo, (y cree que entiende bien) para oponerse á lo que el señor diputado propone.

Sr. Calvo—El caso es este: que se opone

la comision, por un lado, y consiente por otro lado.

Vamos á ver cuales son las disposiciones de provincia á que se ha referido el señor diputado.

Son estas:

«Artículo 4º El registro de los contratos ordenados por la ley de 6 de junio de 1879, se hará prévia solicitud en papel sellado, de un valor igual al de uno por mil sobre el valor de la cosa objeto del contrato.

«Art. 5º Las propiedades que no tuvieren determinado su valor en el contrato, pagarán el uno por mil sobre la última avaluacion para la contribucion directa.

«Artículo 6º No se incluirá ningun contrato hecho fuera de la provincia sin estar cumplidos los siguientes requisitos: «Protocolizacion por escritura pública, en cualquiera de los registros de la provincia, y constancia de estar repuestos todos los sellos que se hubiesen empleado, si tal contrato se otorgara en la provincia.»

Ya vé, pues, que estoy informado de lo que el señor diputado ha tenido la bondad de recordarme, y precisamente es esto lo que encuentro inconstitucional.

Es precisamente esto lo que encuentro inconstitucional, porque de una á otra provincia, no hay mas diferencia que la que la constitucion señala; no puede considerarse á una provincia con respecto á otra en el caso de un estado extranjero. La independencia que tiene cada provincia no es absoluta, no dejando por eso de hacer parte de la nacion.

—(El señor diputado Dr. Zorrilla habla un instante, en voz baja, con el orador).

... He tenido que prestar oido á un resto del latin que habia dejado imperfecto el señor diputado; pero, informado de él, deploro no poder cejar en mis convicciones.

En cuanto á la constitucionalidad del asunto, no recuerdo el resto de las palabras latinas para poder tener el placer de recitarlas á la cámara, que hubiera tenido una cierta variacion, una cierta amenidad en la pesada discusion á que he tenido que entrar forzado por mis convicciones.

Ya, señor presidente, he dicho cuanto creia que debia decir por el momento.

Me falta solamente una observacion, que, á mi entender, es capital para los partidarios del banco hipotecario nacional que vá á fundarse.

Si esto se deja así, sin adoptar algun sistema para todas las provincias, me parece que el banco nacional hipotecario jamás podrá hacer la trasmision de la propiedad, en el caso de que sea necesaria, ni aun la escrituracion de la hipoteca misma aquí, sin que esté obligado á hacerlo de nuevo en la pro-

vincia respectiva, pagando doble ó triple cantidad de impuestos por la duplicacion de sellos y de títulos.

Esto no merece mas esplicacion; simple, mente cito el hecho para llamar la atencion de los señores diputados.

En cuanto á la colocacion del artículo, si la comision crée que es mejor introducirlo como una enmienda á la ley del año 63, agregando la capital y los territorios que no existian entónces, yo no tengo inconveniente.

Sr. Posse—Ahí creo que es oportuno.

Sr. Calvo—¿Cómo dice el señor diputado?

No le pregunto por bronía; desgraciadamente padezco...

Sr. Posse—Y yo, desgraciadamente, no tengo voz.

Había manifestado anteriormente que allí era la oportunidad de colocar la modificacion.

Sr. Calvo—¿El señor diputado manifiesta eso? Pues hagámoslo, entónces.

Sr. Posse—Pero es que no estamos tratando de la ley del año 63. Ahora no podemos hacerlo, porque estamos ocupados de una ley diferente de esa.

Si el señor diputado quiere estudiar la ley del año 63 y pide mi pobre concurso, se lo ofrezco gustoso.

Sr. Calvo—Su concurso personal me es completamente indiferente. Es al concurso del miembro informante al que me refiero.

Sr. Posse—No se lo puedo dar porque no tengo encargo de informar sobre la ley del año 63.

Sr. Calvo—Pero el señor diputado acaba de manifestar que en la ley del 63 era donde correspondía esto: luego, admite que es correcto en el fondo.

Y yo hago uso del derecho que el debate me dá para interpellarlo, no por que necesite el concurso personal del señor diputado.

Sr. Posse—Por eso lo clasifiqué de pobre, y así se lo ofrecí.

Sr. Calvo—Tal vez haya tenido razon el señor diputado.

Sr. Posse—Cómo nó, señor! Lo estoy demostrando. Y el señor diputado está demostrando una gran suficiencia en la materia. Efectivamente, es un atrevimiento de mi parte....

Sr. Calvo—No estamos en el caso de clasificarnos.

Lo que yo deseo establecer, es que la disposicion de que se trata es eminentemente inconstitucional.

Llamo la atencion de la cámara sobre el hecho. Ella resolverá lo que encuentre conveniente.

Sr. Ruiz de los Llanos—Hago mocion para que se cierre el debate sobre este pun-

to, porque me parece que está muy discutido ya.

—Apoyado.

—Se aprueba esta mocion.

—Se vota el artículo propuesto por el señor diputado Calvo, y resulta rechazado por unanimidad.

Sr. Secretario—Hay otro inciso propuesto por el señor diputado Calvo, al final del artículo 278, que dice: «Por demorar mas de cuarenta y ocho horas la expedicion de certificaciones á que se refiere el inciso anterior».

Sr. Colombres—En este punto ha sido mas feliz la comision, porque ha podido ponerse de acuerdo con el señor diputado.

Sr. Calvo—Ha sido mas feliz el proponente.

Sr. Secretario—El inciso de la comision era el siguiente: «Por error ú omision en las certificaciones de inscripcion ó de libertad de inmuebles ó derechos reales». Y el inciso propuesto: «Por demorar mas de cuarenta y ocho horas la expedicion de las certificaciones á que se refiere el inciso anterior.»

Sr. Colombres—El inciso quedaria redactado así: «Por error, omision ó retardo injustificado por mas de cinco dias en las certificaciones de inscripcion ó de libertad de los inmuebles ó derechos reales.»

Sr. Presidente—Esta modificacion ha sido aceptada por la comision?

Sr. Colombres—Sí, señor.

Sr. Ruiz de los Llanos—Pido la palabra.

Yo acepto la forma de este inciso, me parece muy buena; pero creo que el plazo de cinco dias es muy largo, sobre todo cuando viene precedido de las palabras *retardo injustificado*. Creo que bastaria tres dias.

No sé si la comision aceptará.

Sr. Colombres—Podria votarse primero con cinco dias.

Sr. Ruiz de los Llanos—Que vote entónces simplemente las palabras *cinco dias*, y si se rechazan, que se vote *tres dias*.

—Se rechaza *cinco dias*; se aprueba *tres dias*; quedando así sancionado el inciso.

Sr. Ruiz de los Llanos—Pido la palabra.

Parece que ya no queda ningun otro artículo propuesto por el señor diputado Calvo....

Sr. Tagle—Pido la palabra.

Para proponer un artículo en esta ley, que ya he entregado al señor secretario.

Sr. Ruiz de los Llanos—Yo tambien iba

á proponer dos artículos que tambien he entregado al señor secretario, y sobre los cuales he hablado con algunos de los miembros de la comision.

Sr. Tagle—Que se lean.

—**Se lee:**

Artículos propuestos por el señor Ruiz de los Llanos: «Queda abolido el trámite de la consulta de los jueces de lo criminal y correccional á la cámara de apelaciones en los casos de absolucion del procesado.»

«Esta ley empezará á regir desde el 1.º de enero de 1887, debiendo al efecto hacerse con anterioridad los nombramientos de magistrados que ella requiera.»

Artículo propuesto por el señor Tagle: «Las funciones politicas encomendadas por la ley electoral á los jueces de paz serán desempeñadas por los alcaldes que crea la presente ley.»

Sr. Ruiz de los Llanos—He propuesto los dos artículos que se han leído, respondiendo á objetos perfectamente diferentes. Debo ocuparme de ellos separadamente.

Por uno de esos artículos propongo la abolicion de la consulta que actualmente hacen los jueces en lo criminal y correccional á la cámara respectiva, en los casos de absolucion del procesado.

Esta consulta no está establecida en ninguna ley pátria, y es dudoso que esté en las leyes españolas vigentes; sin embargo, se practica, resultando á veces cosas que pueden calificarse de monstruosas.

Conozco, por ejemplo, el caso de un proceso seguido contra un individuo acusado de violacion de una menor. Seguido el sumario, se pasó en vista al fiscal; este opinó que no habia prueba bastante para condenar, que no estaba establecida la culpabilidad; y el juez, de acuerdo con ese dictámen, absolvió al encausado. Pero siguiendo esta práctica, que no está establecida claramente en ninguna parte, consultó el juez á la cámara. Esta, siguiendo el proceso en consulta, lo pasó al fiscal; este se espidió de acuerdo con el juez y con el fiscal de primera instancia. Y á pesar de todo esto, la cámara creyendo que habia criminalidad, condenó al procesado á seis años de penitenciaría.

Me parece que esto no es justificado de ninguna manera. Desde que no hay acusacion en primera instancia, es evidente que es preciso sobreseer y tener por cosa juzgada el pronunciamiento del inferior.

Recuerdo que el señor diputado por Buenos Aires, miembro de la comision de códigos, doctor Demaria, ausente en este momento, siendo juez del crimen sostuvo, con calor y empeñosamente, que estas consultas

en los casos de absolucion eran completamente contrarias á las leyes y hasta al buen sentido; y jamás las hizo, á pesar de que fué apercibido y amonestado por la cámara y aun por la corte suprema.

Recuerdo haber oido decir, á propósito de esto, mismo que estas consultas establecidas por la práctica colocaban al juez del crimen en peores condiciones que un vigilante. Un vigilante sospecha de un individuo y le toma preso en la calle; en el camino se convence de que no es tal culpable y le suelta. Nadie le dice nada, porque tiene esa facultad para ello. Mientras tanto, un juez del crimen, con criterio mucho mas adelantado que un vigilante, un juez del crimen que ha empezado un proceso y se ha convencido de que no hay mérito para continuarlo, no puede poner en libertad al encausado, sin consultar al superior.

Creo que estas razones bastarán para justificar el artículo que introduzco.

El miembro informante de la comision, á quien hice leer este artículo, observó que no se refería precisamente á la ley orgánica sino á la de procedimientos; pero yo opino que si es preciso abolir estas consultas, (de lo que creo no dudará ninguno de los señores diputados), es necesario hacerlo en esta ley, puesto que si en esta hemos puesto en vigencia la ley de procedimientos de la provincia de Buenos Aires, muy bien podemos hacer esta salvedad respecto al procedimiento que se está aplicando en lo criminal, por una rutina, nada mas.

Es sabido que no tenemos ley de procedimientos propia, para los juicios criminales; estamos aplicando las leyes españolas, en cuanto son conciliables con nuestra constitucion y leyes pátrias; de ahí se derivan estas consultas que no responden á nada.

Se comprendería perfectamente que en el caso de condenacion, sobre todo en el caso de condenacion á muerte, la consulta existiera; porque puede un defensor, por negligencia ó malignidad, no apelar de la sentencia. Entónces, sí, vendría bien la consulta. Pero en el caso de absolucion, si el fiscal no apela,—porque está en el deber de apelar si la sentencia no es justa á su modo de ver,—si nadie apela, ¿por qué va á ir en consulta? Debe terminar todo ahí, sin causar retardo en la conclusion del proceso.

Esto, en cuanto al primer artículo que he propuesto.

En cuanto al segundo, que debe ir al final, en caso de ser aceptado por la cámara, se reduce simplemente á fijar la época en que la ley debe empezar á regir.

Precisamente porque hemos hecho muchas modificaciones á la ley vigente, es ne-

cesario dar cierto tiempo para que pueda ponerse en práctica la que dictamos; y por eso, en el concepto de que quede sancionada en este año, conviene fijar el 1º de enero de 1887, estableciendo al mismo tiempo que se haga los nombramientos de magistrados con anterioridad, para que puedan funcionar como la misma ley dispone.

No sé si para estos artículos debo pedir el apoyo de la comisión de la cámara.

—Apoyado.

—Entra en discusión el primer artículo propuesto por el señor Ruiz de los Llanos.

Sr. Calderon—Pido la palabra.

Yo conozco, señor presidente, mas de cuatro casos en que ha habido absolución por el juez de primera instancia sin que haya apelado el fiscal, y hecha la consulta, siguiendo la tramitación establecida, los encausados han sido condenados á mas de diez años de presidio. Y encuentro que seria un peligro dejar la vindicta pública á la competencia de solo dos funcionarios, el juez y el fiscal.

Es cuestión de competencia, de criterio; y habiendo un tribunal superior, no me parece cauto ni prudente suprimir tal trámite; creo que ese superior debe conocer en esos procesos que han estudiado el juez y el fiscal de primera instancia.

Tengo al respecto experiencia propia: conozco, como he dicho, mas de cuatro casos en que, después de absuelto el procesado y de no haber sido apelada la sentencia, ha sido condenado á mas de diez años de prisión.

No entro á hacer apreciaciones respecto á las cualidades de los funcionarios, porque no es del caso: todos somos hombres, y podemos equivocarnos.

Pareciéndome delicado y peligroso suprimir ese procedimiento, votaré en contra del artículo propuesto.

Sr. Ruiz de los Llanos—Pido la palabra.

Precisamente me he fundado, para proponer el artículo, en algo de lo que acaba de exponer el señor diputado.

Creo anormal, creo contrario á todo principio jurídico bien entendido, que se siga un proceso en que no hay acusador, ni particular ni público.

Me parece que es completamente erróneo é inadmisibles en la época presente, que el juez pueda, como se decía en las leyes españolas, ser acusador y juez. Creo que cuando no hay acusación, se debe sobreseer.

Por consiguiente, opino que, para salvar la omisión, la dejadéz, la pereza de un

agente fiscal que no apela, no se puede atribuir á un tribunal superior el rol de acusador y de juez. Desde que no hay acusador, no hay proceso.

Conozco los casos á que se refería el señor diputado, y me he fundado en alguno de ellos. Por eso he referido el de un acusado absuelto en primera instancia, de acuerdo con el agente fiscal que no podía apelar; y en el cual, subido el proceso á la cámara de apelación, pasado al fiscal, este ha opinado que debía confirmarse la sentencia absoluta; sin embargo, el tribunal, constituyéndose, anormalmente, irregularmente, á mi modo de ver, en acusador, ha dicho: Yo formulo la acusación ante mí, y le condeno y le aplico seis años de prisión.

Esto es irregular, y me parece que no debe permitirse.

—Se vota el primer artículo propuesto por el señor Ruiz de los Llanos, y es aprobado.

Sr. Presidente—Ahora se vá á leer nuevamente el artículo presentado por el señor diputado Tagle.

—Se repite la lectura.

Sr. Tagle—Pido la palabra.

Mi objeto al proponer este artículo, señor presidente, es obviar muchas dificultades que se sentiría si encomendásemos á los jueces de paz creados por esta ley las funciones políticas que les estaban encomendadas anteriormente.

Se ha hecho, por esta ley, del juez de paz, un funcionario con verdaderas atribuciones judiciales, puesto que entra á conocer en asuntos que son ya de una cuantía muy superior.

Estos jueces tienen que asistir diariamente á su oficina, á despachar los asuntos que les están encomendados. Son jueces, además, pagados por el gobierno y que tienen los deberes que esta ley les impone.

Las funciones que la ley electoral dá á estos funcionarios, ya sabemos cuales son: presidir las mesas inscriptorias y, además, entender en las reclamaciones que se hagan durante un mes, que es el término prescripto.

Resultaría, entonces, que estos jueces de paz, si tuviesen la facultad que propongo pase á los alcaldes creados por esta misma ley, no podrían concurrir á sus juzgados á desempeñar las funciones que les están encomendadas, puesto que, como he dicho, las reclamaciones duran por el término de un mes; y como durante este mes tienen que atender á todas las reclamaciones que se interpongan, estos jueces no podrían material-

mente desempeñar las funciones que por esta ley se les encomienda.

Hay una otra consideracion que, en mi opinion, es muy atendible, y es que debe evitarse, en cuanto se pueda, que estos jueces de paz tomen una participacion activa en los negocios políticos. Deben ser jueces simplemente, y mantenerse estraños á la política, en cuanto sea posible, para que así puedan desempeñar su mision con toda la independencia que es necesario tenga la justicia, para que ella sea bien administrada.

Es por esta razon, señor presidente, que propongo este artículo, para que estas funciones políticas que desempeñan los jueces de paz pasen á ser desempeñadas por los alcaldes.

Pido el apoyo de mis honorables colegas.

—Apoyado,

Sr. Presidente—Está en discusion el artículo que se acaba de proponer.

Sr. Goyena—¿No es el trámite que pase á comision?

Sr. Presidente—Lo he puesto en discusion, siguiendo el trámite establecido para la discusion de esta ley.

Sr. Goyena—¿Qué es lo que dice el reglamento?

Sr. Presidente—El reglamento dispone que se vote si se tratan sobre tablas ó pasan á comision los artículos propuestos; pero como la cámara ha resuelto que los que se presenten en la discusion de este proyecto...

Sr. Goyena—Pues yo pediría que este artículo pasára á estudio de la comision, porque es algo sério.

Sr. Presidente—La cámara resolverá por medio de una votacion si se ha de tratar o no inmediatamente el artículo presentado por el señor diputado por Cordoba.

—Practicada la votacion, resulta afirmativa.

—No haciéndose uso de la palabra, se vota el artículo y resulta empatada la votacion: 22 votos contra 22.

Sr. Tagle—Se puede rectificar, porque creo que hay error en el resultado.

—Practicada la rectificacion solicitada, resulta aprobado el artículo por 23 votos contra 21.

Sr. Presidente—Ahora se vá á leer el último artículo presentado por el señor diputado Ruiz de los Llanos.

—Se lee.

Sr. Presidente—Si no se hace oposicion por parte de ningun señor diputado, se tomará inmediatamente en consideracion.

Sr. Presidente—Está en discusion.

Sr. Figueroa (M. A.)—Pido la palabra.

Creo que no se puede fijar el tiempo en que ha de empezar á rejir esta ley.

Toda ley debe empezar á rejir desde el momento en que haya sido sancionada por el congreso y promulgada por el poder ejecutivo.

Solamente respecto de ese artículo...

Sr. Gomez—No, señor: toda la ley empezará á regir desde el 1º de enero de 1887.

—Se vota el artículo en discusion, y es aprobado.

Sr. Secretario—El artículo que sigue es de forma.

Sr. Presidente—Siendo la hora avanzada, invito á la cámara á levantar la sesion.

—Así se hace, siendo las 5 y 50 p. m.